

➤ Resumen Ejecutivo

John Collins, Editor Invitado, LSE IDEAS.

Las acciones para el control internacional de las drogas se iniciaron en 1909, orientadas a erradicar el abuso de ciertas drogas mediante el control de la oferta. Basados en esta creencia respecto al control de la demanda, se desarrolló un complejo sistema internacional de aplicación de la ley. Un siglo después, los datos empíricos están disponibles y resultan abrumadores: el sistema ha fracasado. Peor aún: es cada vez más evidente que el costo humano de continuar muchas de sus políticas las vuelve injustificables. Desde el encarcelamiento masivo en los Estados Unidos y Asia, a la epidemia del VIH/SIDA que inunda Rusia, y las olas de violencia que se propagan a lo largo de América Latina – las actuales políticas globales sobre drogas están empeorando los problemas globales relacionados a estas sustancias. Éste ya no es más un tema de controversia sino que, tal como lo sugiere Joseph Spillane, es algo que “ningún investigador serio cuestiona”. Ello no obstante, impulsado por una mezcla de inercia burocrática e ideológica, el sistema internacional para el control de drogas –regido por las Naciones Unidas (NN.UU.) e impuesto por una serie de países clave— continúa aplicando muchas de las mismas políticas fallidas. Este informe se pregunta por qué el sistema evolucionó de la manera en que lo hizo, y explora el potencial para su reforma.

A menudo, quienes buscan entender el complejo y oscuro sistema internacional para el control de las drogas, dirigen su mirada al lenguaje empleado en sus diferentes convenciones y tratados reguladores – los cuales son susceptibles a una amplia interpretación. Sin embargo, como lo señala William McAllister, el sistema evolucionó a través de complejas fuerzas diplomáticas, burocráticas, sociales e interpersonales. Es sólo mediante una comprensión de estas fuerzas más amplias que podemos explicar adecuadamente cómo se construyó el sistema, y por qué éste continúa funcionando como lo hace. Enriqueciendo esta discusión sobre complejidad histórica, David Courtwright analiza las razones por las cuales algunas drogas tradicionalmente han sido objeto de una “guerra”, mientras que otras se han arraigado profundamente en la estructura económica dominante. Esta cuestión es ampliada por el estudio de James Mill sobre la cuestionable evidencia científica que sustenta la incorporación del cannabis al sistema internacional de drogas controladas.

Tal como lo muestra el análisis realizado por Joseph Spillane, para comprender mejor las actuales políticas internacionales de drogas, debemos enfocar nuestra atención en los daños considerables que estas políticas generan. En particular, Spillane sugiere que los investigadores se concentren en el cúmulo de evidencias disponibles sobre la experiencia cotidiana de los actuales adictos contemporáneos a las drogas, la cual revela los impactos –a menudo desgarradores— de las diversas guerras contra estas sustancias. Paul Gootenberg analiza la interacción entre las políticas internacionales y las cambiantes “cadenas productivas” de la cocaína en América Latina durante los últimos cien años, culminando en la actual crisis mexicana. Al hacerlo, Gootenberg resalta una tendencia inherente a los gestores de políticas internacionales sobre drogas para crear problemas mayores y más violentos que los que se resuelven con sus políticas de interdicción.

La ex Presidenta de la Confederación Suiza, Ruth Dreifuss, y su colega Diane Steber evalúan la interacción de su país con el sistema internacional, resaltando la presión que éste último ejerce sobre Estados que aplican políticas fuera del paradigma tradicional basado en la oferta. Luego David Bewley-Taylor examina la “década de UNGASS”, entre 1998 y 2008, cuando la comunidad internacional se comprometió a lograr “un mundo libre de drogas”. Bewley-Taylor sostiene que el consenso que caracterizó este período se viene fracturando en la actualidad, en la medida en que los Estados-naciones están persiguiendo más abiertamente enfoques alternativos.

En la sección final de este informe, damos una mirada hacia el futuro del sistema y resaltamos áreas específicas que requieren reforma inmediata. Damon Barrett muestra que el sistema actual carece de supervisión en materia de derechos humanos fundamentales y, como resultado, permite abusos sistemáticos a estos derechos. Joanne Csete se enfoca en el apoyo brindado por la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a políticas internacionales que no son científicas, y en la renuencia de esta entidad a adoptar políticas de salud pública basadas en prácticas óptimas, particularmente en relación a la prevención del VIH/SIDA. Csete sostiene que la JIFE sigue siendo “la entidad más hermética y menos transparente de todas las instituciones apoyadas por las NN.UU.”

La maquinaria para el control internacional de las drogas se ha solidificado alrededor de esquemas de pensamiento caducos y de políticas fallidas. Pese a ello, el sistema ha resultado ser extraordinariamente exitoso en restringir la experimentación de políticas en todo el mundo, y estimular la continuación de estrategias contraproducentes. Es necesario dar dos pasos. En primer lugar, deben tomarse medidas inmediatas para incorporar estándares básicos de derechos humanos, y para mejorar el nivel de supervisión al interior del sistema. Ello es particularmente urgente en las áreas de decisiones sobre financiamiento internacional y en los niveles operativos de la JIFE. En segundo término, debe llevarse a cabo una evaluación independiente y exhaustiva del enfoque, así como del aparato regulador, del sistema internacional para el control de drogas, a fin de realizar reformas estructurales de largo plazo. Tal evaluación debe comenzar ahondando en la comprensión de las fuerzas históricas que han dado forma, y que continúan sustentando, las actuales políticas y el sistema. Este informe debe servir como un punto de partida para tal esfuerzo. ■